

Valle, Héctor Walter (diciembre 2003). *Espasmos de una economía : Un país hecho de demoliciones*. En: Encrucijadas, no. 24. Universidad de Buenos Aires. Disponible en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires: <http://repositorioubi.sisbi.uba.ar>

Espasmos de una economía

Un país hecho de demoliciones

Si en 1982 la deuda externa era impagable e ilegítima, ¿qué posibilidades hay de pagarla hoy cuando se ha triplicado su monto? Hace ya 20 años, nadie podía cerrar los ojos ante la evidencia de que el feroz endeudamiento era consecuencia del modelo basado en la especulación financiera de la dictadura. Sin embargo, las políticas económicas se mantuvieron firmes en los mismos empeños que ahondaron la desindustrialización, aumentaron el desempleo hasta el récord actual que ronda el 20% y demolieron al sector público. La férrea resistencia a abandonar la convertibilidad adoptada en los '90 mostró cuán coherentes fueron todas las administraciones democráticas en sostener hasta las últimas instancias el patrón de acumulación de riquezas consolidado en los últimos diez años. Sobre la base de esa historia plagada de inequidades es que debe construirse un programa económico alternativo al neoliberalismo.

Héctor Walter Valle

Licenciado en Economía Política (UBA). Docente en la Maestría de Historia Económica y de las Políticas Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Preside la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo.

El proceso económico de los últimos veinte años se desarrolló entre los agudos extremos conformados por el estallido de las dos grandes crisis originadas en el endeudamiento externo. Si la deuda externa ya era impagable, y en alto grado ilegítima, en 1982 cuando alcanzaba a 45.070 millones de dólares, ¿qué posibilidad de atenderla puede existir ahora que llega a 177.000 millones y con no menores cuestionamientos a su legitimidad, como los derivados del megacanje, entre otros? Más aún cuando en este largo lapso el PIB por habitante creció a un ritmo del 0,2% anual promedio.

Hace 20 años, era imposible ignorar que lo ocurrido con la deuda constituía una clara consecuencia del modelo basado en la especulación financiera impuesto por la dictadura militar. Sin embargo, a partir de entonces, las políticas económicas se mantuvieron en el mismo encuadre ideológico, siendo la convertibilidad su fase superior. Luego del derrumbe de la convertibilidad, con el que concluyó la gran recesión/depresión de 1998/2002, parece haberse aprendido la lección. Ahora, y a partir de una generalizada crítica al neoliberalismo, la Argentina está intentando recuperar el sendero del desarrollo cambiando el eje de su modelo de acumulación volviendo a poner la prioridad en la expansión de las actividades productivas.

Cambios estructurales relevantes

En el marco de tal continuidad de políticas, las acciones desenvueltas a lo largo de estos años llevaron a la interrupción primero, y el franco retroceso después, en el proceso de industrialización, que había sido el principal elemento dinámico y modernizante de las décadas anteriores. La existencia de extensos períodos con tipo de cambio subvaluado fue recortando el espacio para las actividades manufactureras internas, limitando su posibilidad de exportar y estimulando el ingreso de importaciones competitivas.

Uno de los correlatos de la desindustrialización fue la drástica reducción del empleo formal en esas actividades, otro estuvo constituido por la desintegración impuesta en el esquema productivo sectorial y regional, y un tercero consistió en la decreciente viabilidad de los proyectos dirigidos al sector. No fue menor su responsabilidad en el fuerte endeudamiento externo, privado y público, contraído a lo largo de todos estos años.

Paralelamente, nuestro país registró en los '80 un largo período con elevadas tasas inflacionarias, que derivaron en dos picos hiperinflacionarios. Este fenómeno, combinado con la restricción salarial y el aumento del desempleo ya citados, entre otras consecuencias, originó una notable caída en la participación de la remuneración al trabajo dentro del ingreso. A su vez, la persistencia de la inflación erosionó velozmente a la moneda. Y esa tendencia motorizó al proceso de dolarización desatado a fines de los años '80. Un paso decisivo, en tal dirección, fue dado con la adopción del modelo de la convertibilidad.

Este último fue parte de los grandes cambios operados a partir de 1989 y respondió a los lineamientos impulsados por los países acreedores con el fin de resolver el problema de las deudas. Se integró en un conjunto estratégico cuyo objetivo proclamado era resolver la situación de insolvencia creada por el endeudamiento externo. No menos importante fue, por entonces, la decisión de provocar un superávit fiscal y ejecutar privatizaciones con el doble propósito de reducir la magnitud de la vieja deuda y crear un stock de reservas suficiente para respaldar a la convertibilidad del peso en un esquema de tipo de cambio fijo.

El proceso de estabilización de precios que se alcanza a partir de la implementación del Programa de la Convertibilidad, en marzo de 1991, si bien contuvo temporariamente una de las fuentes más violentas de regresividad distributiva constituida por la inflación, debido a los instrumentos utilizados para alcanzar tal estabilidad de precios provocó, a su turno, nuevas condiciones de degradación social vía desempleo.

Las perturbaciones en la acumulación de capital

A partir de 1982, desatada por la gran crisis de la deuda externa, se verificó en nuestro país una sensible caída en la tasa de inversión. Esa drástica reducción en el ritmo de acumulación constituyó uno de los signos más alarmantes acerca de la vulnerabilidad que aquejó a la economía argentina durante los años '80. En 1990, la relación entre la IBI y el PIB se había reducido al 14%, magnitud equivalente al 55% de lo verificado diez años antes. Luego del acuerdo Brady, y estimulada por el proceso de las privatizaciones, se registró una recuperación de este indicador. Dicho en otros términos, la inversión neta fue negativa hasta 1992. El mismo ciclo se repitió con la crisis de la convertibilidad. La historia se repite, ya que la inversión bruta interna cayó permanentemente a partir de 1998 acumulando hasta 2002 un derrumbe del 56,3 % que llevó al coeficiente IBI/PBI al 11,2 % en 2002.

Como señalamos más arriba, los sectores productores de bienes, y en particular la actividad manufacturera, se encuentran entre los más afectados por ese largo ciclo negativo en el proceso inversor. Por el contrario, en las fases de recuperación (especialmente bajo el régimen de la convertibilidad), el crecimiento tanto de la producción como de la inversión tuvo por escenario principal a las ramas generadoras de servicios y fue paralelo con la formación de nuevos grupos económicos que se estructuraron en torno de las privatizaciones y los bancos. Esta última orientación fue también el común denominador de aquellas nuevas inversiones desenvueltas en la

industria y en los sectores más modernos del agro.

No son circunstancias que deban sorprendernos. Como un correlato lógico de haberse abandonado el viejo patrón de industrialización, la inversión en proyectos manufactureros solamente tuvo lugar en aquellos nichos vinculados con la internacionalización del capital. Generalmente se vincularon, además, con la absorción de empresas, parte de cuyas líneas productivas pasaron a integrarse en ciclos de producción internacionalizados y el resto directamente se desmantelaron. En las actividades primarias los nichos favorecidos fueron la explotación de hidrocarburos y el desarrollo de nuevas tecnologías (simbolizado en los procesos de siembra directa) para una importante expansión de la producción agrícola para exportación.

Ocaso y desaparición del Estado nacional

El sector público ha constituido uno de los escenarios más importantes donde se jugó la aplicación del modelo neoliberal en la Argentina. Ese proceso se desarrolló desde 1976 en adelante, vale decir que precedió a la vuelta de la democracia, pero pudo comprobarse que había llegado para quedarse. En segundo lugar, los sucesivos programas encarados para hacer frente al problema de la deuda externa en función de la condicionalidad fijada por el FMI siempre establecieron y establecen objetivos para las cuentas fiscales que suponen un mayor racionamiento en el gasto y la ampliación de la potencialidad recaudatoria. En todos los casos se fijan metas para el déficit fiscal que luego resultaron sucesivos acuerdos stand-by. Sabido es que la parcela del gasto que siempre termina siendo más afectada es la dirigida al desarrollo social o la inversión pública, mientras que los intereses absorben un espacio cada vez mayor.

Un hito histórico, en el proceso de la demolición del sector público, está constituido por el rol que le tocó jugar al Estado en el programa de la convertibilidad. En ese sentido, el mismo tuvo entre sus principales características el acelerado proceso de las privatizaciones. El mismo respondió a tres objetivos fundamentales: la reducción de la vieja deuda (condición necesaria para establecer el acuerdo Brady), complementar los recursos que se precisaban para lograr las metas de superávit primario, y llevar a cabo, velozmente, la retirada del sector público de toda actividad productora de bienes y servicios.

La eliminación del desequilibrio fiscal ha constituido una prioridad a lo largo de todo el período considerado. Hasta mediados de 1994 se obtuvieron notables éxitos en esa dirección. Los mismos se originaron en dos fuentes principales. En primer lugar, en un aumento en la presión tributaria, que asumió un carácter más regresivo al apoyarse esencialmente en la tributación sobre el consumo. En segundo término, en los frutos del proceso privatizador.

El mencionado cambio de signo verificado en 1994 y a posteriori de la crisis del Tequila en 1995 estuvo originado, en primer término, por una desaceleración en el ritmo recaudatorio. Ella resultó claramente incompatible con la eliminación de aportes patronales dispuesta con el propósito de reducir costos de producción. También se contrapuso con la pérdida de ingresos originada en la reforma del sistema previsional. Se generó así una fuente endógena de déficit fiscal que llegó a magnitudes claramente incompatibles con la sustentabilidad de la convertibilidad. Al cortarse el financiamiento externo para atender tales déficit, el sistema entró en picada y se estrelló a principios de 2001. Luego, forzado por la inflación mientras el gasto se mantenía constante y se verificaba cierta mejoría en la recaudación, las cuentas fiscales fueron mejorando para

llegar a una situación donde el gasto público de la Argentina, medido en valores reales, se encuentra entre los más bajos de los países en desarrollo.

El tiro del final

En 1991, el Plan de Convertibilidad vino a convalidar las generalizadas tendencias hacia la dolarización que predominaban en la economía. En el plano financiero, la estrategia adoptada impuso una política de dinero duro. La misma, junto al ajuste fiscal y el tipo de cambio fijo, respondían al doble propósito de doblar la inflación y viabilizar los acuerdos con la banca acreedora. La contrapartida lógica de la dolarización fue —a consecuencia del significativo aumento de los depósitos en dólares, sumado al desaliento que provocan las bajas tasas de interés pasivas en pesos— que el ritmo al que creció la monetización de la economía evolucionara por debajo de lo que enseñaba la experiencia histórica (nacional e internacional) en materia de reequipamiento de dinero luego de superados los picos hi-perinflacionarios.

La corrida contra los depósitos que se desató luego de la devaluación mexicana desnudó las rigideces que se derivan del modelo de la convertibilidad. Para evitar la incertidumbre, se decidió avanzar en la dolarización, permitiendo respaldar con dólares la totalidad de los depósitos indiscriminadamente. Cuando se produce una caída en el nivel de las reservas, el Banco Central encuentra muy acotadas sus posibilidades de actuar como prestamista de última instancia. Pero se generaron así tensiones adicionales que sumaron presión a la incertidumbre sobre el sistema financiero, continuó la caída de los depósitos y la conducción económica debió introducir dos nuevas figuras: el fondo fiduciario para respaldar los depósitos y el uso del financiamiento externo para avanzar en la privatización de la banca provincial. El estallido de la convertibilidad, a fines de 2001, como era inevitable tuvo como escenario principal al rígido esquema financiero, artificialmente dolarizado, que se había instalado supuestamente para tornar al bastión del tipo de cambio fijo en inexpugnable.

Las medidas desesperadas, adoptadas a fines de 2001, para sostener el sistema constituían acciones contradictorias con los postulados básicos de la convertibilidad en tanto éste constituya un sistema donde libremente la gente dispone de su dinero en pesos o dólares a una paridad fija. Pudo constatarse, a fines del 2001, que ambos ejes centrales en la política económica de la última década —convertibilidad y sistema financiero extranjerizado y concentrado— se encontraban vacíos de capacidad para soportar la corrida y virtualmente inoperables. Otro tanto ocurrió con la supuesta relación privilegiada que nuestro país tenía con los mercados internacionales del dinero.

Pero en lo que las autoridades económicas de esa época se mostraron coherentes hasta las últimas instancias, es que por esa vía se pretendía sostener hasta las últimas consecuencias el patrón de concentración de la riqueza que se consolidó en la última década. Ello se vio ratificado con la bancarización forzada que se impuso el 1 de diciembre de 2001, tomando tal decisión luego de haber convalidado —y financiando mediante adelantos transitorios del BCRA a los bancos—, durante varios meses, la evidente fuga de capitales que venía sucediendo. El costo de la recesión se expresó en la creciente masa de desocupados o subocupados, magnitud que llegó al 21% de la PEA Activa a fines de 2002, el ejército de ahorristas estafados y los inéditos niveles alcanzados por la pobreza. Sobre esa historia, plagada de inequidad y descrédito es que debe construirse un programa alternativo. Ese es el objetivo del Plan Fénix, que se encuentra en condiciones de demostrar que otra Argentina es posible.